



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-001-2018-00454-02 (O2-22-025)
Demandante: PAULA ANDREA GÓMEZ OSORIO
Demandado: JUAN ENRIQUE CASTRO ARANGO
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.037 DEL 17 DE JUNIO DE 2022
Asunto: INCIDENTE DE NULIDAD

En Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-001-2018-00454-02 (O2-22-025), instaurado por **PAULA ANDREA GÓMEZ OSORIO** en contra de **JUAN ENRIQUE CASTRO ARANGO**, en punto a resolver el Recurso de Apelación propuesto por la parte demandada, respecto del auto que resolvió el incidente de nulidad propuesto por la demandante.

1. ANTECEDENTES

1.1. Trámite de Primera Instancia

La señora PAULA ANDREA GÓMEZ OSORIO, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió Incidente de Nulidad en procura de que se declare la nulidad de la audiencia celebrada el 22 de octubre de 2020 al interior del proceso que se adelanta en contra de JUAN ENRIQUE CASTRO ARANGO, con fundamento en que, por auto del 04 de septiembre de 2019 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín convocó a las partes para el 22 de octubre de 2020, con el fin de llevar a cabo la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, prevista en el artículo 77 del CPTSS; que con ocasión de la pandemia por la COVID-19, y atendiendo a lo

dispuesto en el Decreto 806 de 2020, la señalada diligencia debía llevarse a cabo de manera virtual; que no le fue puesto a disposición ni el expediente digital, ni el link a través del cual se podría conectar a la audiencia, ni el mismo fue publicado a través de la página de la rama judicial, ni mediante la publicación por Estados; que en respuesta de la solicitud radicada el 12 de noviembre de 2020, el cognoscente de instancia le informó que el link de la audiencia había sido remitido al correo contacto@estrategaabogados.com.co, sin que a la referida dirección electrónica hubiere llegado alguna invitación; que el despacho no remitió el link de la audiencia al correo electrónico de la demandante, relacionado en el acápite de notificaciones de la demanda, ni al correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados – SIRNA, ni intentó otras formas de comunicación, a pesar de que los contactos telefónicos fueron suministrados en el libelo genitor, y que a la fecha no cuenta con acceso al expediente digital para efectos de consultarlo o llevar a cabo cualquier actuación en el proceso.

La controversia se dirimió en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el que el 11 de diciembre de 2020 (doc.05), declaró la nulidad de lo actuado dentro de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, celebrada el 22 de octubre de 2020, y en su lugar, señaló el 09 de junio de 2021, a las 09:00 am.

Inconforme con la decisión antes descrita, la poderhabiente judicial del demandado e incidentado JUAN GUILLERMO HERRERA GAVIRIA, interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación (carpeta 06, doc.02), mediante el cual deprecó que se repusiera la decisión de decretarse la nulidad de la audiencia, dejando sin efecto tal decisión y se continuara con el trámite del proceso, corriendo traslado del incidente de nulidad para garantizar su debido proceso y la oportunidad de pronunciarse.

Por auto del 20 de agosto de 2021 (carpeta 17, doc. 07) la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, declara la nulidad de lo actuado dentro del incidente de nulidad, a partir del auto de 11 de diciembre de 2020 para que en su lugar la cognoscente de instancia corriera traslado al incidente previo a resolver de fondo este.

1.2. Decisión de Primera Instancia

Subsanadas las falencias procedimentales la a quo mediante auto del 29 de noviembre de 2021 (doc. 20) decide nuevamente el incidente de nulidad, declarando la nulidad de lo actuado dentro de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas,

saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, celebrada el 22 de octubre de 2020, y en su lugar, señaló el 22 de junio de 2022, a las 09:00am., por cuanto no advertía vulneración al debido proceso en tanto no se percató que el correo con el link de acceso a la diligencia remitido al correo indicado por la parte actora en la demanda, había rebotado, y ante la inasistencia de la parte actora no procedió a establecer las razones de la inasistencia a la audiencia.

1.3. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, la poderhabiente judicial del demandado, interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación (carpeta 21, doc.02), con el propósito de que se revoque la misma para continuar con el trámite del proceso, es decir, con la audiencia de trámite y juzgamiento, asuntando para tal efecto que: (i) la audiencia había sido programada con más de un año de anterioridad, y previo a la propagación de la Pandemia COVID-19, (ii) el apoderado judicial de la parte actora incumplió con la carga de vigilar el proceso de forma permanente, debido a que nunca indagó ante el despacho la forma en la que se realizaría la audiencia, (iii) la invitación a la audiencia virtual fue remitida el 15 de octubre de 2020, a la cuenta de correo contacto@estrategaabogados.com.co inscrita en la demanda, (iv) la parte actora incumplió con el deber de suministrar al despacho la dirección de correo electrónico, en caso de haberlo cambiado, en tanto no se evidencia en el plenario memorial que informe de tal cambio o novedad, e (v) incumplió la parte actora con el deber de asistir a la audiencia virtual (artículos 3º y 7º del Decreto 806 de 2020).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El 03 de enero de 2022 (02SegundaInstancia, doc. 02), se admitió el recurso de alzada, y el 07 de febrero del mismo año (02SegundaInstancia, doc.03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran los alegatos de conclusión por escrito; dentro del término oportuno la pasiva, recurrente en apelación del auto que decidió la nulidad, procedió a presentar alegatos de conclusión (02SegundaInstancia, doc. 04), mediante los cuales reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación; finalmente la parte actora, dejó fenecer el término sin descorrer el traslado para alegar de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar ¿si la decisión dictada por la a quo al declarar la nulidad alegada por la parte incidentante, respecto de la realización la audiencia del artículo 77 del CPT y SS el día 22 de octubre de 2020, se encuentra o no ajustada a derecho?

2.2. Solución del Problema Jurídico Planteado

El artículo 29 de la CP, prescriptor del debido proceso como garantía procesal de la cual gozan todas las partes e intervinientes en las actuaciones judiciales y administrativas, engloba los siguientes aspectos:

- a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
- b) El derecho al juez natural, identificado este como el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
- c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
- d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

- e) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Como se puede vislumbrar, una de las principales garantías del debido proceso, es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial, de ser oída, hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas allegadas en su contra, y solicitar la práctica y valoración de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten.

Ello así, no cabe duda de que el principio de publicidad es uno de los presupuestos esenciales del derecho a la defensa, pues su finalidad es dar a conocer la actuación adelantada a los particulares directamente afectados. Cabe subrayar que la indebida notificación, de acuerdo con la jurisprudencia, se sustenta en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación.

En este aspecto vale resaltar que, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, generado por la pandemia de la Covid 19, se expidió el Decreto 806 de 2020, con el cual se pretendió implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, además de agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, siendo para el 15 de octubre de 2020, plenamente aplicable esta normatividad.

En el caso *sub iudice*, no obstante, no obra prueba en el plenario de que el link de la audiencia que remitió la cognoscente de instancia hubiera rebotado, habrá de dársele plena credibilidad al dicho de la Juez, quien como directora del proceso, por demás debe actuar de forma imparcial y no debe tener ningún interés en las resultas del proceso, a más de que en virtud de la función pública que presta, está llamada a velar por el respeto al trámite adecuado y el debido proceso; así mismo procedió la Sala a verificar en el Sistema de información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) el correo que registró el apoderado judicial de la activa (carp. 02, doc. 05), encontrándose que asociado a la Tarjeta Profesional

de Abogado N° 293.167, se encuentra registrado el correo electrónico jaimejia1152@gmail.com, el cual resulta ser disímil al correo electrónico que uso el Despacho para remitir el link de acceso a la diligencia contemplada en el artículo 77 del CPT y SS., y si bien no existe certeza de la fecha en la cual dicho apoderado judicial actualizó sus datos en tal registro, tampoco obra prueba de que para la data de la diligencia no hubiese cumplido con esta carga procesal; en igual sentido, se resalta que no obra prueba del envío de invitación a este correo electrónico o al de la demandante.

En ese contexto, era imperioso garantizar la conectividad de la demandante y su apoderado judicial, procediéndose a la remisión del link de acceso a la diligencia, pues si bien este fallador plural no desconoce que el profesional del derecho que funge por activa debió ser más proactivo, vigilante de la actuación e indagar al despacho respecto de la realización de la diligencia, también es cierto que para tal calenda únicamente habían trascurrido 3 meses desde el levantamiento de la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura (Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020), y por tanto aún existía cierta incertidumbre respecto del uso de las herramientas tecnológicas de información y comunicación al interior de cada despacho, sin que además se pueda perder de vista que las consecuencias procesales de la inasistencia a la diligencia recaen directamente en la demandante, a quien se itera no se evidencia que se le haya remitido el link o hipervínculo o enlace, encontrándose su apoderado judicial en imposibilidad de enviárselo, al no haber sido remitido en debida forma.

Sobre este particular, en providencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Octavio Augusto Tejeiro Duque, STC7284-2020 Radicación n° 25000-22-13-000-2020-00209-01, del 9 de septiembre de 2020, se indicó:

“... Entonces, como el «acceso y conocimiento de los medios tecnológicos» a través de los cuales se ha de celebrar la «audiencia virtual» es condición para su realización, la falta de uno o de ambos elementos por el «apoderado judicial de alguno de los extremos procesales», puede ser invocada como causal de «interrupción del proceso». Si dichas circunstancias ocurren y se alegan antes de la vista pública, darán lugar a la «reprogramación» de la sesión, y si a pesar de ellas la «audiencia» se practica, o, son concomitantes a ésta, podrá alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3° del artículo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita (negrilla intencional de la Sala)

Todo ello, claro está, cuando de acuerdo con las «circunstancias» de cada caso en particular, la ausencia de «acceso y conocimiento tecnológicos» impida la comparecencia del togado a la respectiva audiencia, aspectos que deberá valorar el juez de conformidad con los criterios antes señalados”

Ahora bien, conforme al numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, el proceso es nulo en todo o en parte cuando *"5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria."*

Corolario de lo anterior, el derecho al debido proceso del extremo activo de la relación procesal se vio vulnerado, dado que al agendar de forma virtual la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, fue infructuoso el envío del link, enlace, vínculo o hipervínculo a la parte demandante; no obstante, se realizó la diligencia, desconociendo que la justicia virtual que fue implementada como consecuencia de la pandemia de la COVID 19, permite mayor flexibilidad frente a la garantía de conectividad de todas las partes y que los despachos judiciales fueron dotados con las herramientas necesarias para acceder al registro SIRNA, siendo obligación para los profesionales del derecho registrar sus correos electrónicos, sin que exista prueba de que el correo actualmente registrado no fuera el que se encontraba asociado con el procurador judicial de la demandante.

En consecuencia, encontrándose ajustada a derecho la decisión emitida por la a quo, de declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, celebrada el 22 de octubre de 2020, y la reprogramación de la misma para el día 22 de junio de 2022, a las 09:00am., se impartirá confirmación al auto del 29 de noviembre de 2021, objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que decidió el INCIDENTE DE NULIDAD promovido por PAULA ANDREA GÓMEZ OSORIO, en desarrollo del proceso ORDINARIO LABORAL que se adelanta en contra de JUAN ENRIQUE CASTRO ARANGO proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, por no haberse causado en la medida de su no comprobación.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, de conformidad con el artículo 41, literal c) del Estatuto Instrumental Laboral.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quina de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.107, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **21 de junio de 2022** a las 08:00am,
los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario